Pronunciamento público de las organizaciones juveniles participantes en el ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES DE BOLIVIA POR LA DEMOCRACIA

Las organizaciones juveniles participantes del **Encuentro Nacional de Jóvenes de Bolivia por la Democracia**, realizado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra los días 30, 31 de julio y el 1° de agosto del presente 2025, con participación de delegaciones de todo el país, hacemos conocer a la opinión pública nuestra preocupación por el grave proceso de devastación ambiental que enfrenta Bolivia - principalmente derivado de los incendios forestales y la minería aurífera, los que acentúan los impactos del cambio climático en nuestro país y degradan las condiciones productivas y ambientales- y por el hecho que las distintas fuerzas políticas actualmente en carrera electoral, no solamente no han considerado esta crisis ambiental como correspondería en sus propuestas programáticas, sino que por el contrario plantean – a título de medidas para salir de la crisis económica- intensificar actividades económicas como la minería del oro y otras de alto impacto ambiental, sin ningún ajuste ambiental, lo que claramente profundizaría la crisis que actualmente ya es extrema.

En este marco:

1° Hacemos un llamado a los jóvenes del país a estar muy atentos a las medidas y compromisos que puedan asumir los candidatos en carrera electoral que se relacionen con esta problemática.

2° Informamos a la ciudadanía que el país ya ha sufrido un impacto devastador por la ocurrencia reiterada de incendios forestales, los cuales en el año 2024 llegaron a afectar a más de 12 millones de hectáreas -lo que equivale a una superficie similar a la de los departamentos de Cochabamba, Oruro y Tarija, juntos-, y que sumaron sus efectos a los ya provocados por las quemadas previas de más de 40 millones de hectáreas desde 2014, **provocando una creciente degradación de suelos, la pérdida de ecosistemas enteros, la muerte de millones de animales silvestres y domésticos calcinados**, el agravamiento de las **sequías** y de las **amenazas a la seguridad hídrica**, por la afectación de los **regímenes de precipitaciones** y la **compactación de suelos**, que **limita crecientemente la infiltración hídrica y la recarga de agua al subsuelo y a los acuíferos**.

Pese a la gravedad de estos hechos, vemos que nuevamente este año ya se han alcanzado más de 4.200 focos de calor al día de hoy 1 de agosto, lo que muestra que estamos plenamente vulnerables a las amenazas de los incendios.

Lo inaceptable de estos hechos es que esta creciente devastación del territorio por incendios forestales descontrolados, no es simple resultados de sequías, sino de una política expresa de **fomento de la ampliación de la frontera agrícola en áreas de bosque**, promovidas por el gobierno nacional desde la aprobación de la Agenda Patriótica, y de las denominadas Leyes Incendiarias.

3° Destacamos los **graves impactos ambientales provocados por la minería del oro en el país**, que se expande en todo el territorio nacional destruyendo el medio ambiente y contaminando ríos y ecosistemas con el venenoso mercurio, que afecta día a día la salud de más bolivianos, con daños irreversibles en los riñones y el sistema nervioso.

La minería del oro ha sido sistemáticamente promovida por el Gobierno Nacional desde la promulgación de la **Ley Minera 535** (2014), que declara todo el territorio nacional área minera, sin ninguna intervención frente a sus graves impactos ambientales, y con total tolerancia frente al alto nivel de ilegalidad existente en el sector y su bajo nivel de tributación, que prácticamente no deja beneficios para el país, el cual queda solo con la factura de la destrucción ambiental y de la salud de la población.

4° Denunciamos la **creciente destrucción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas** del país, posibilitada por el debilitamiento de la protección estatal de estas y su apertura al desarrollo de actividades extractivas a su interior. Desde el gobierno nacional **se ha debilitado sistemáticamente los cuerpos de protección de las áreas protegidas** mediante el despido de guardaparques formados y la insuficiente financiación de las actividades operativas de protección, y se ha permitido diversas actividades extractivas en ellas; actualmente 16 áreas protegidas están afectadas por operaciones mineras a su interior, 11 por actividades hidrocarbúricas y, en conjunto, estas enfrentan un incremento de la caza ilegal y el tráfico de especies silvestres.

5° Observamos que estos procesos de destrucción ambiental y de las condiciones productivas del país, son resultado de la priorización de las industrias extractivas por parte del gobierno Nacional y de la alta dependencia del mismo de la economía extractiva, la cual, por lo demás, ofrece poco empleo para la población en general y para los jóvenes en particular, que empezamos nuestra vida con muy limitadas oportunidades laborales.

6° Destacamos así mismo, que **la crisis ambiental del país, también alcanza a las áreas urbanas y a las regiones metropolitanas en las que se concentra la mayor parte de la población nacional**, las cuales actualmente enfrentan acelerados procesos de crecimiento urbano no planificados, que están **destruyendo las áreas verdes y áreas protegidas** urbanas, y **aumentando las amenazas a la seguridad hídrica**, por la impermeabilización de áreas de recarga hídrica y la contaminación hídrica. Estas regiones enfrentan también crecientes procesos de contaminación, derivados de deficientes sistemas de gestión de los residuos sólidos, transporte y aguas residuales, las cuales están generando un entorno insalubre para la población que las habita por las deficiencias en la gestión de la basura y de los sistemas de transporte público, este último altamente contaminado.

Frente a estos problemas consideramos que es necesario:

1° La **reorientación del modelo económico del país**, actualmente centrado en el extractivismo y en la centralización económica en el Estado, y la migración de este hacia una economía sostenible, basada en la diversificación productiva y una amplia participación de la población en la generación de riqueza.

2° **La investigación y sanción a los responsables de provocar los incendios forestales en el país**, incluyendo el involucramiento de autoridades en estos hechos, y **la urgente abrogación de las leyes incendiarias**.

El fortalecimiento de los sistemas de prevención y control del fuego y el apoyo a la labor de los bomberos voluntarios.

3° El **abandono de la política de expansión de la frontera agrícola en áreas de bosque**, impulsada por el gobierno nacional desde la aprobación de la **Agenda Patriótica (2015)** y su sustitución por una política de uso de suelos respetuosa de la capacidad de uso mayor de los mismos, y de los Planes de Uso del Suelo, así como de **programas de restauración y uso sostenible de las áreas degradadas por los incendios**.

4° El **fortalecimiento de la gestión y protección ambiental por parte del estado, y de sus responsabilidades establecidas por la CPE y la Ley 1333**.

5° **La abrogación de las normas que permiten actividades extractivas en Áreas Protegidas (leyes 535 y 2656, 969 y 906)** y el fortalecimiento de la protección efectiva de las áreas protegidas del país y de los territorios indígenas, en los que se conservan las culturas y la biodiversidad del país.

6° La **protección efectiva de los defensores de derechos en materia ambiental**, crecientemente amenazados.

7° El fortalecimiento de la **seguridad y soberanía alimentaria** y garantizar a la población boliviana el derecho a una **alimentación sana**.

8° **El fomento al desarrollo juvenil**, mediante la formación y el empleo de calidad y el apoyo a emprendimientos económicos que permitan aprovechar el bono demográfico.

9° **El mejoramiento del sistema educativo** y su articulación a las estrategias productivas y económicas del país y a la innovación tecnológica.

10 **El fortalecimiento y mayor eficiencia de la labor del Estado**, en base a la meritocracia de los funcionarios, a la evaluación de sus resultados y a la reducción de supernumerarios. Y el fortalecimiento de la **independencia de los poderes del Estado** y del **respeto al estado de derecho en el país**.

Para concluir, ¡hacemos un llamado a los jóvenes del país y a la ciudadanía a sumarse activamente a la construcción de soluciones frente a la crisis ambiental, económica e institucional del país!

Organizaciones participantes:

Plataforma Juvenil Bolivia Construye, Los 25 de los 25, Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (PBACC), Delegación Latinoamericana Cochabamba, GAIA PACHA, Comité Municipal de Niños, Niñas y Adolescentes- Santa Cruz, Comité Impulsor reglamentación Ley 1529 Santa Cruz, Movimiento Eco, ODJI, Red JEC, SEMPLAD, Red MUN Santa Cruz, RELIDD, Red JS, Generación 20-20, Juventudes Indígenas y Afrodescendientes Santa Cruz (JIAC), Juventud San Isidro, EDUSERVER, Inspira Santa Cruz, Eco Comunicación, red juvenil del chaco chuquisaqueños, Comité departamental y municipal niño niña adolescente de Machareti, Control Social de 4 Cañadas, Control Social del municipio de San Miguel, Concejo departamental de juventudes del Beni (CDJB), CICHAR, Siembra Juventud Tarija, Campaña generación esperanza, Fundación sueños de esperanza Camiri, Colectivo Socio Ambiental de Camiri (COSAC), Red de Monitores Ambientales Gran Chaco - Tarija, Jóvenes Guardianes del Aguaragüe, Plataforma Departamental de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes del Beni, Colectivo Socio Ambiental Villa Montes (COSOAVI), Jóvenes Guardianes de Ñande Ivy – Machareti, Ta+rusu Guaraní, Proyecto Curucusí, Juventud Guarani Iyambae, Movimiento Eco, Consejo Departamental de Jóvenes Guaraní de Tarija, Escuela de periodismo (EPI).

Santa Cruz, 1° de agosto 2025